

RESOLUCIÓN No. 781
(10 de Julio de 2020)

“Por medio de la cual se declara la urgencia manifiesta en el Hospital General de Medellín “Luz Castro de Gutiérrez” E.S.E.”

EL GERENTE DEL HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN “Luz Castro de Gutiérrez E.S.E.” EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO,

En uso de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las establecidas en el Acuerdo 110 de 2014 Estatuto Contractual del Hospital General de Medellín “Luz Castro De Gutiérrez E.S.E.”, lo dispuesto en el artículo 33 del Estatuto ibidem, lo contenido en los artículos 41 a 43 de la Ley 80 de 1993, el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, y demás normatividad vigente.

CONSIDERANDO

1. Que el día 09 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud solicitó a los países la adopción de medidas prematuras con el objetivo de prevenir y controlar la propagación y transmisión del coronavirus COVID -19.
2. Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote del nuevo Coronavirus COVID-19 es una pandemia, en virtud de los alarmantes niveles de propagación del virus; constituyéndose en una emergencia sanitaria mundial, que requiere una acción efectiva e inmediata de los gobiernos, las personas y las empresas.
3. Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió Resolución Nro. 380 del 10 de marzo del 2020, “Por la cual se adoptan medidas preventivas sanitarias al país, por causa del Coronavirus COVID – 19 y se dictan otras disposiciones”, entre las cuales se toman medidas preventivas sanitarias de aislamiento y cuarentena de las personas.

4. Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo del 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, el artículo 2.8.8.1.4.3 del Decreto 780 de 2016, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020, término que podrá ser prorrogado; en virtud de esta Resolución, se adoptaron una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del nuevo Coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos.
5. Que en la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, en su artículo 1 se ordena prorrogar la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020, al igual que se adoptan las medidas sanitarias las cuales se articulan con aquellas acogidas en el amparo de la emergencia Económica, Social y Ecológica, esto en el desarrollo de la protección al orden público y la convivencia.
6. Que durante la emergencia económica, social y ecológica el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior ha expedido los Decretos 418, 420, 457, 531, 536, 593, 636, 689 y 749 mediante los cuales ha impartido instrucciones para preservar la salud, la vida y evitar el contacto y la propagación del Coronavirus Covid – 19 y mantener el orden público en todo el territorio nacional, ordenando el aislamiento preventivo obligatorio.
7. Qué en atención a la declaratoria de emergencia sanitaria en todo el país ante el riesgo de propagación del coronavirus COVID-19 y en concordancia con las acciones tomadas por el **Gobierno nacional, departamental y municipal**, y ante la decisión del Departamento de Antioquia en cuanto a la declaratoria de Calamidad Pública por el término de seis meses, se deben adoptar las medidas para la protección y atención en salud de la población residente en este territorio.
8. Que la Organización Mundial de la Salud -OMS, al declarar como pandemia al coronavirus COVID-19 esencialmente por la celeridad de su propagación, insta a todos los Estados a tomar las acciones perentorias y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas y correctivas con el fin de reestablecer en la mitigación del contagio.

9. Que el Artículo 2 de la Constitución Política, ordena que: "Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares".
10. Que la Corte Constitucional en sentencia 1999, ha definido la calamidad pública como: "una desgracia o infortunio que afecta intempestivamente a la sociedad o a un sector importante de ella. " *La calamidad pública alude, entonces, a un evento o episodio traumático, derivado de causas naturales o técnicas que altera gravemente el orden económico, social o ecológico, y que ocurre de manera imprevista y sobreviniente. Al respecto, la Corte ha señalado que "los acontecimientos, no solo deben tener una entidad propia de alcances e intensidad traumáticas, que logren conmocionar o trastocar el orden económico, social o ecológico, lo cual caracteriza su gravedad, sino que, además, deben constituir una ocurrencia imprevista, y por ello diferentes a los que se producen regular y cotidianamente, esto es sobrevinientes a las situaciones que normalmente se presentan en el discurrir de la actividad de la sociedad en sus diferentes manifestaciones y a las cuales debe dar respuesta el estado mediante la utilización de sus competencias normales"*
11. Que el derecho a la salud es un derecho legítimo que se encuentra consagrado no solo en la Constitución de 1991, sino también en múltiples instrumentos jurídicos internacionales que hoy hacen parte de nuestra normativa por vía del llamado bloque de constitucionalidad. Igualmente, se encuentra desarrollado en innumerables disposiciones de origen legal y reglamentario. En especial por medio de las Leyes 100 de 1993, 1122 de 2007, 1438 de 2011 y 1751 de 2015.
12. Que, el Derecho a la Salud en concordancia con el Estado Social de Derecho se constituye en un derecho fundamental indiscutible por su relación directa con la dignidad humana, por ser universal, he inherente a la persona, y por tener las características de indiscutible e irrenunciable, por entrañar libertades y derechos, por ser esencial en la materialización de una vida digna y con calidad, por ser un derecho integral e integrador de otros derechos y condiciones, vital para la eficacia real del principio de igualdad material, por tener una dimensión individual, pero también una dimensión colectiva, por todo ello, el derecho fundamental a la salud en Colombia debe ser objeto de todas y cada una de las garantías constitucionales y legales previstas para tal

tipo de derechos y no solo para efectos de su justiciabilidad y efectividad mediante el mecanismo de la acción de tutela.

13. Que el Artículo 49 de la Constitución Política establece que "La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la Ley. Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad".

14. Que el Artículo 49 ibídem, sustancia el derecho a la Salud y del cuidado integral de los ciudadanos y de la comunidad en general, frente al cual ha expresado la Corte Constitucional en Sentencia No. T-487 de agosto 11 de 1992 que "Los recursos, cuidados y tratamientos previstos para la atención en la salud a las personas, deben salvaguardar invariablemente la dignidad personal y los derechos humanos y civiles, basarse en criterios razonables y técnicos que propendan por la rápida recuperación de la salud. La implementación de los derechos de los pacientes exige respeto a la diferencia y una práctica más democrática".

15. Que la Corte Constitucional en Sentencia T-573 del 27 de mayo de 2005, con ponencia del Magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, señaló:
"Derecho a la continuidad en la prestación del servicio público de salud: s"



*relación con el principio de efectividad, con el principio de eficiencia y con el principio de confianza legítima 6.1.- Han sido reiteradas las ocasiones en las cuales esta Corte se ha pronunciado sobre la necesidad de que los servicios públicos se presten de manera efectiva. La Corte ha entendido que la prestación efectiva de los servicios públicos está estrechamente conectada con la continuidad en su prestación que supone, a la vez, la prestación sin interrupciones, permanente y constante del servicio. El alcance que la Corte ha fijado al principio de continuidad del servicio público de salud es bastante amplio, en especial, cuando está de por medio la protección de derechos fundamentales, como la vida, la integridad y la dignidad. 6.2.- El principio de continuidad en la prestación del servicio público de salud también está relacionado con el principio de eficiencia. Esta Corte ha afirmado de manera reiterada que: "el principio de eficiencia no solamente tiene que ver con la eficacia y la adecuada atención, sino con la continuidad en la prestación del servicio (SU.562/99). Esto es particularmente importante tratándose de la salud. Se debe destacar que la eficiencia debe ser una característica de la gestión. La gestión implica una relación entre el sistema de seguridad social y sus beneficiarios. La gestión exige una atención personalizada en torno a los derechos y necesidades de los usuarios y una sensibilidad social frente al entramado normativo para que el beneficiario no quede aprisionado en un laberinto burocrático" 6.3.- La naturaleza misma del servicio público de salud en virtud de lo establecido por **el artículo 49 de la Constitución Nacional**, se conecta de modo necesario con la permanencia del servicio, así que no puede admitirse su interrupción. Si a lo anterior se añade el carácter obligatorio de los servicios es factible sostener como lo hizo la **Corte en sentencia T-889 de 2001. M. P. Manuel José Cepeda** que: "[e]l Estado es responsable de garantizar que las entidades de la seguridad social - públicas o particulares- estén dispuestas en todo momento a brindar atención oportuna y eficaz a sus usuarios. Allí radica uno de los fines esenciales de la actividad que les compete según el artículo 2° de la Carta" (subraya no original). 6.4.- La continuidad en la prestación del servicio público de salud se ha protegido no solo en razón de su conexión con los principios de efectividad y de eficiencia sino también por su estrecha vinculación con el principio establecido en el artículo 83 de la Constitución Nacional de acuerdo con el cual "Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que*

aquellos adelanten ante estas." Esta buena fe constituye el fundamento sobre el cual se construye la confianza legítima, esto es, la garantía que tiene la persona de que no se le suspenderá su tratamiento una vez iniciado." Por ello se entiende que, en materia de salud, la Ley de Garantías Electorales consagró dos tipos de excepciones a las limitaciones de Contratación Directa: un primer tipo, frente a las eventuales situaciones de urgencias "sanitarias" y un segundo tipo, referente al tema de cumplimiento de los deberes de la "entidades sanitarias y hospitalarias"

- 16.** Que el **Artículo 366 de la Constitución Política** consagra que *"El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación".*
- 17.** Que el Decreto 537 de 2020 "Por cual se adoptan medidas en materia de contratación estatal, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica", consagra en su artículo 7. "Contratación de Urgencia: Con ocasión de la declaratoria de estado de Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y de Protección Social en consonancia con lo dispuesto en el artículo 42 de la ley 80 de 1993, se entiende comprobado el hecho que da lugar a declarar la urgencia manifiesta por parte de las entidades estatales, para la contratación directa del suministro de bienes, la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro, con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus COVID 19, así como para realizar las labores necesarias para optimizar el flujo de los recursos al interior del sistema de salud, las actuaciones contractuales adelantadas con fundamento en la urgencia manifiesta se regirán por la normatividad vigente."
- 18.** Que aunado a lo anterior, la Contratación Estatal, se encuentra estrechamente ligada con la realización de los fines del Estado, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos incluyendo en estos el servicio de salud, siendo los fines esenciales del Estado de manera principal: Servir a



la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución

19. Que el **Artículo 33 del Acuerdo de Junta Directiva N° 110 de 2014 Estatuto Contractual del Hospital General de Medellín “Luz Castro de Gutiérrez” E.S.E.**, consagra la **URGENCIA MANIFIESTA**, que a su tenor literal establece: “En los casos en los cuales la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras, por presentarse situaciones relacionadas con los estados de excepción, o cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas, y en general cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección, el Hospital declarara la Urgencia Manifiesta.

Configurada una de las causales señaladas en el literal anterior, el Gerente del Hospital mediante Resolución motivada declarara la Urgencia Manifiesta, conforme a la normatividad vigente que rige la materia”.

20. Que el **Hospital General de Medellín “Luz Castro de Gutiérrez E.S.E.”**, en atención a la declaratoria de la emergencia sanitaria que se encuentra vigente en la actualidad por la pandemia del Coronavirus Covid – 19, se ve obligado a acudir a la Declaratoria de Urgencia Manifiesta, como mecanismo excepcional de contratación, concebido precisamente para aquellos casos que exigen una respuesta inmediata de la administración, utilizando los mecanismos que permitan garantizar el normal desarrollo de la institución para enfrentar las necesidades que el servicio de salud exige, como la adquisición y suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; adicionalmente cuando se presente una emergencia sanitaria o una calamidad como la que atraviesa el país, la cual se constituye como actos o hechos de fuerza mayor o desastre y demandan actuaciones inmediatas para la prestación efectiva del servicio de salud y en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concursos públicos que no son tan expeditos como se requiere en atención a la emergencia sanitaria, los cuales demandan un lapso de tiempo considerable que afectarían el manejo administrativo y funcional de la institución.

21. Que con el objetivo de garantizar la continua y eficiente prestación del servicio público de salud ante la emergencia ocasionada por el COVID 19, y dado el excesivo incremento del número de contagiados y el alto crecimiento en las cifras negativas, aun con las medidas adoptadas por el Gobierno Municipal, Departamental y Nacional, se requiere una respuesta urgente e inmediata por parte de la entidad, en cuanto a la adquisición de bienes, servicios y obras que permitan atender en debida forma el alto volumen de demanda del servicio de salud, que crece de manera exponencial diariamente, por lo cual, no es posible ajustarse a los tiempos que por ley demanda un proceso de contratación ordinario que se surta de acuerdo a las disposiciones establecidas en la ley y los reglamentos.

Que, en virtud de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

CLÁUSULA PRIMERA: Declarar la urgencia manifiesta en el **HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN "Luz Castro de Gutiérrez E.S.E."**, a partir del 10 de julio del 2020; dicha declaratoria finalizara cuando desaparezcan las causas que le dieron origen, con el fin de atender la emergencia hospitalaria que se suscita ante la contingencia presentada por la celeridad de la propagación del coronavirus COVID-19, situación de emergencia descrita en la parte motiva de este Acto Administrativo, la cual afecta en forma ostensible la continuidad de las actividades misionales de atención en salud, con la consecuente paralización de los procesos y de los servicios que oferta el Hospital.

CLÁUSULA SEGUNDA: Celebrar los contratos necesarios que permitan conjurar las actuales situaciones, en consecuencia y dadas las circunstancias expuestas que demandan actuaciones inmediatas por parte del **HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN "Luz Castro de Gutiérrez E.S.E."**, celebrar los contratos de suministros de bienes, de servicios o de construcción de obras, como si se tratara de la mínima cuantía, que permitan atender las necesidades descritas en los considerandos de este Acto Administrativo.

CLÁUSULA TERCERA: Realizar todas las acciones pertinentes y necesarias, concerniente a los traslados y adiciones presupuestales que se requieran dentro del presupuesto de la entidad, para garantizar el suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras necesarias para superar la urgencia manifiesta.

CLÁUSULA CUARTA: La declaratoria de urgencia manifiesta, regirá hasta tanto se conjure la emergencia hospitalaria que se suscita ante la contingencia presentada por la celeridad de la propagación del coronavirus COVID-19, termino durante el cual el Hospital General de Medellín "Luz Castro de Gutiérrez" E.S.E. adoptará las medidas que estime necesarias para prevenir y/o mitigar los efectos que ocasione la emergencia.

CLAUSULA QUINTA: En atención a lo consagrado en el artículo 43 de la ley 80 de 1993, se procederá a notificar a los organismos de control fiscal de la presente resolución y de los contratos que se efectúen en virtud de la declaratoria de urgencia manifiesta.

CLÁUSULA SEXTA: Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.


Dada en el Municipio de Medellín a los **10 días del mes de Julio 2020.**

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

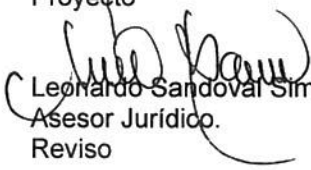


MARIO FERNANDO CÓRDOBA PÉREZ

Gerente
Hospital General De Medellín
"Luz Castro de Gutiérrez E.S.E."



Luisa Fernanda Correa Marín
Jefe Oficina Jurídica
Proyecto



Leonardo Sandoval Simanca
Asesor Jurídico.
Reviso